El maldesarrollo y los gobiernos locales de centro-izquierda: el caso de Zacatecas

Humberto Márquez Covarrubias

Introducción

Este capítulo pretende hacer un análisis crítico de la gestión de los gobiernos locales emanados de centro-izquierda, toda vez que estos se presentan como postulantes de un proyecto alternativo al modelo neoliberal vigente en México por al menos tres décadas. Al respecto, la experiencia del estado de Zacatecas resulta reveladora, al menos por tres consideraciones: 1) el modelo neoliberal ha desmantelado la economía campesina, que fungía como uno de los puntales de la subsistencia de la mayoría de su población; 2) la entidad se ha especializado en exportar gente hacia Estados Unidos a fin de acceder a una fuente de empleo y a ingresos para cubrir la subsistencia de los dependientes económicos radicados en los lugares de origen; 3) la emergencia de un movimiento cívico-electoral precipito el derrumbe del régimen priista asociado a formas de control autoritario y antidemocrático. La alternancia electoral generó una gran expectativa para que un gobierno de centro-izquierda reconstruyera la institucionalidad local, diseñara políticas públicas de nuevo tipo, promoviera un régimen político democrático y participativo y, en suma, encabezara un proyecto de desarrollo local alternativo.

Más allá de las posiciones político-partidarias inmersas en el debate político local y nacional, nuestro argumento es que dicha gestión gubernamental, en lugar de buscar caminos alternativos, retomó el modelo neoliberal como su marco categorial y político, al punto de que el gobierno local asumió la promoción de la inversión privada del gran capital como su prioridad, sin reparar en los múltiples costos sociales, económicos y ambientales asociados. El proyecto de desarrollo local alternativo se redujo a promover el proceso de neoliberalización en el ámbito local, es decir, procrear espacios de valo-

rización para el capital privado monopólico y oligopólico, lo cual requiere canalizar recursos públicos para atraer inversión, pues se supone que ésta es el nuevo agente del desarrollo. En última instancia, este proceso desemboca en un maldesarrollo, donde las actividades económicas preponderantes son de corte extractivista y la mayoría de la población afronta una especie de malvivir, que puede ser expresado en términos de pobreza, marginación, miseria, inseguridad, migración y desempleo.

Neoliberalización como estrategia de desarrollo desigual

Bajo el andamiaje de acumulación y poder que ha sido denominado globalización neoliberal o, de manera más crítica, nuevo imperialismo, nuevas fuentes de generación y apropiación de riqueza se han venido forjando, a nivel nacional, en las últimas tres décadas. Con ese fin, las corporaciones grandes y demás poderes fácticos han logrado someter al Estado, el trabajo, la naturaleza, el dinero y el conocimiento. Los resultados están a la vista: privatización, extranjerización y monopolización de la economía mexicana; concentración de capital, poder y riqueza entre la élite social; y expansión de la masa de excluidos y pobres. Este proceso se denomina neoliberalización.

En México, el modelo neoliberal ha significado la monopolización y extranjerización de la economía nacional, asociada a la pérdida de soberanía nacional y la profundización de las condiciones generales de subdesarrollo. La aplicación de este modelo se le atribuye a los gobiernos de derecha, como el Partido Revolucionario Instititucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), que han conformado una alianza política de facto a nivel gubernamental y parlamentario. En tal sentido, se supone que los gobiernos emanados de la centro-izquierda, representada primordialmente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) representan una opción alternativa al neoliberalismo. Empero, la realidad desmiente este supuesto, al menos en el ámbito de los gobiernos locales, donde los gobiernos perredistas han sido singulares animadores del proceso de neoliberalización regional. Un ejemplo conspicuo es Zacatecas, que en 1999 experimentó una especie de transición política cuando el partido hegemónico, el PRI, perdió el gobierno local a manos de un movimiento cívico-electoral que situó en la gubernatura a un candidato, Ricardo Monreal Ávila, emanado de la izquierda electoral perredista. Por dos sexenios consecutivos (1999-2004 y 2004-2010), el PRD detentó el poder local, pero se mostró incapaz de diseñar una política de nuevo tipo y más bien se dedicó a consecuentar las directrices políticas del modelo neoliberal, que

produce desigualdad y exclusión y que canaliza la mayoría de recursos públicos y bienes de la nación y bienes comunes a la órbita de la valorización de capital. Este gobierno se presenta más como un facilitador de la inversión privada, bajo los postulados de la nueva gerencia pública, que un gobierno "cercano a la gente". Al final de cuentas, el PRD, representado por el gobierno de Amalia García Medina, afrontó un voto de castigo popular que regresó el poder local al PRI, con lo cual pareciera cerrarse una breve experiencia de gobierno local "alternativo".

En Zacatecas, durante los últimos cuatro sexenios, periodo que abarca dos gobiernos priistas y dos perredistas, en consonancia con la imposición de este modelo a nivel nacional, la neoliberalización ha venido progresando de manera lenta pero consistente. La alternancia electoral, que posibilitó el arribo al poder de la izquierda electoral, paradójicamente ha resultado funcional a este proceso, pues la apertura de espacios de valorización para el capital se plantea como una necesidad para el ejercicio de gobierno, con el complemento de programas de obra pública y de asistencia a la pobreza. Sin que sea un proceso inédito, a nivel local la neoliberalización se desgrana en los siguientes términos:

Gobierno facilitador y dadivoso

La versión neoliberal del "buen gobierno" o "nueva gerencia pública", renuncia a promover el desarrollo local alternativo y una mejor inserción en el ámbito nacional e internacional. Conscientemente, opta por un régimen de "libre empresa" que exige un entrono favorable a los grandes negocios. Bajo la premisa decimonónica de "dejar hacer, dejar pasar", no hay reparos en los costos sociales y ambientales. El activismo gubernamental inscrito en el marco categorial y político del neoliberalismo construye una pista de aterrizaje favorable a la inversión privada foránea. Mientras que se acentúan las transferencias de recursos públicos al ámbito privado del capital, las necesidades sociales son postergadas: se supone que, en su momento, serán satisfechas vía el efecto derrame. Por lo pronto, la desvalorización de recursos naturales y mano de obra –es decir, el deterioro de la calidad de vida– aparece como requerimiento de inversionistas y ofrecimiento de la gestión proempresarial.

Este gobierno asume una visión tecnocrática de la sociedad, exalta a los empresarios como los actores clave del desarrollo y designa al frente de las instancias de promoción económica a funcionarios cobijados por la ideología neoliberal, que concibe a la población y los trabajadores como un mero recurso barato y desechable que contribuye a consolidar a la entidad como

un lugar atractivo para la inversión. Tal como lo sintetizó un ex secretario del ramo, la consigna es "vender (a) Zacatecas".

A modo de compensación, el gobierno instrumenta programas asistenciales que otorgan dádivas a los sectores más pobres, quienes configuran la base social electoral del régimen político. Éste es el "rostro humano" del neoliberalismo y el "gobierno cercano a la gente". Los comicios electorales terminan siendo una perversión de la democracia, cuando los contendientes se disputan, simplemente, el privilegio de encabezar al gobierno facilitador y dadivoso, sin plantear alternativas de fondo.

Competitividad espuria

En teoría, la competitividad de empresas y territorios está basada en la innovación tecnológica. Los gobiernos diseñan programas para impulsar el progreso técnico con la participación de centros de investigación y empresas. Empero, cuando el fundamento competitivo descansa en trabajo y recursos naturales baratos, entonces estamos hablando de una "competitividad espuria", para utilizar la expresión de Fanjzylber.

Los inversionistas no promueven la innovación, sino que están interesados en depredar los recursos naturales (por ejemplo, agua, minerales y maderas) y explotar intensivamente la mano de obra. En lugar de generar círculos virtuosos de aprendizaje y formación de capacidades tecnológicas, el de por sí endeble aparato productivo local termina por descomponerse.

Los sectores productivos y educativos, amén de la sociedad en su conjunto, pierden capacidades productivas, aprendizajes y empleos. En lugar de generar un excedente económico que se distribuya y reinvierta regionalmente, la transferencia de riqueza hacia otras latitudes marca la pauta, sea por vía fiscal, remisión de ganancias o comercio desigual.

El esquema resultante es el debilitamiento institucional, sobrexplotación, rezago tecnológico, desempleo y desacumulación.

Extractivismo de recursos naturales

El asentamiento del gran capital minero responde a la estrategia corporativa de sustracción de las riquezas minerales de la entidad como oro, plata, mercurio, hierro, zinc, entre otros. Empresas como Goldcorp, Peñoles y Frisco extraen las materias primas para trasladarlas hacia otras entidades o al extranjero, donde son beneficiadas e industrializadas. En este trance, se benefician de la fuerza de trabajo dispuesta a ocuparse en condiciones precarias, inseguras y peligrosas.

Otra modalidad de extractivismo acontece en la industria refresquera y cervecera (Coca-cola y Grupo Modelo) que consume grandes cantidades de agua, justo en una entidad sedienta. La apropiación de bienes comunes representa una modalidad de saqueo neocolonial que el discurso desarrollista justifica diciendo que la extracción es necesaria para incorporar inversión y empleo, además de que es un paso previo a la industrialización de materias primas.

También se convalida cuando se confunde crecimiento económico con desarrollo, como si el crecimiento fuese sinónimo de empleo de calidad y justicia social. Al tiempo en que el extractivismo convierte los bienes comunes en mercancías, la población padece la destrucción del medio ambiente. Ni siquiera el gobierno obtiene grandes beneficios debido a que el sistema fiscal prevaleciente permite que estas compañías paguen impuestos en otras latitudes.

Este esquema se reduce a un mero intercambio ecológico desigual: una vez sustraídos los recursos naturales, las localidades quedan en el abandono y contaminadas, en tanto que la población padece desempleo, enfermedades y pobreza, y, en suma, es despojada de sus riquezas naturales.

Maquilización de la manufactura

La política de desindustrialización nacional, la desarticulación de sectores productivos y la descomposición del mercado interno tienen como referente la renuncia a la planeación del desarrollo y el sometimiento a la estrategia corporativa de localización, que desplaza etapas del proceso productivo a regiones con sobreoferta de trabajo barato. En ausencia de una política industrial que intercale la producción agropecuaria e integre las regiones del estado, se promueven parques y naves industriales que albergan, primordialmente, maquiladoras, cuyo esquema operativo se basa en la importación de insumos, maquinaria, equipo, cuadros directivos y diseño; sólo ocupa trabajo barato de las inmediaciones. Estas empresas están prácticamente desconectadas de la economía local, pues no generan vínculos productivos. Tampoco producen aprendizaje, transferencia y capacidades tecnológicos.

Desde otro punto de vista, este esquema productivo representa una especie de exportación de fuerza de trabajo con la peculiaridad de que el trabajador no tiene que emigrar para ocuparse. Como regla general, en estas maquiladoras persisten condiciones de trabajo altamente precarizadas: bajos salarios, inseguridad laboral, elevada rotación, alta intensidad de trabajo, jornadas prolongadas y no se permite la sindicalización independiente.

En última instancia, la maquiladora sólo deja bajos salarios y desindustrialización. Además, los inversores esgrimen una amenaza permanente de relocalizar sus plantas en regiones que ofrecen trabajo más barato y mayores facilidades gubernamentales. Muchas maquiladoras han sido desmontadas de la noche a la mañana.

Mercantilización del patrimonio cultural

La promoción del turismo descansa en la estrategia de mercantilizar el patrimonio cultural. El rescate y remozamiento del centro histórico, además de preservar el rango de Patrimonio Cultural de la Humanidad concedido por UNESCO, atiende al requerimiento de valorizar este espacio público para estimular el consumo de turistas y población local con capacidad de compra. Para satisfacer ese nicho de mercado, florece un entramado de establecimientos como cafés, bares, cantinas, restaurantes y comercios. Estos atractivos se entrecruzan con los diversos servicios públicos y religiosos asentados en esta demarcación. No se escatiman recursos para reparan fachadas, azoteas, calles y plazuelas.

Las modificaciones en la renta del suelo propician el despoblamiento de esta zona en beneficio de la instalación de negocios y, en contrapartida, se promueven zonas residenciales exclusivas, para población de altos ingresos, y fraccionamientos populares, muchos de ellos deplorables, para el resto de la población.

Asimismo, los festivales culturales se rediseñan para erigir una industria del espectáculo que organiza, principalmente, conciertos masivos de acceso gratuito, pero con cargo al erario público, para atraer vacacionistas, sobre todo nacionales, cuyos gustos están cercanos a los dictados de la televisión, aunque también se programan actividades artísticas de valía.

La mercantilización del patrimonio cultural, que va más allá del receloso afán conservacionista del paisaje arquitectónico, reporta importantes beneficios a la industria del turismo: agencias de viaje, líneas aéreas, cadenas hoteleras y restauranteras y, en menor medida, prestadores de servicios locales, como, por ejemplo, concesionarios de taxis. Sin embargo, este modelo no está planeado para fomentar el "derecho a la ciudad", es decir, la apropiación del espacio público por la mayoría de la población y sus diversas expresiones sociales, culturales y políticas.

Este proyecto excluye a los sectores marginados, como vendedores ambulantes tradicionales e informales, pequeños comerciantes y familias pobres que no pueden consumir en el centro de la ciudad.

La publicitación de una ciudad hermosa y bien cuidada resalta una percepción fugaz de la imagen y el decoro, pero, como toda fachada, encubre los costos que entraña el proceso de transformación urbana en un contexto más amplio. Como el notable contraste existente entre el cúmulo de inversión aplicado a la valorización del casco colonial y la carencia de servicios básicos en colonias, barrios, rancherías y municipios enteros.

Extranjerización del comercio minorista

Derivado de la monopolización del comercio a nivel nacional, se asientan en la entidad grandes comercios detallistas. Las cadenas comerciales extranjeras se aposentan con todas las facilidades en el estado y dominan el mercado mediante una estrategia comercial de "precios bajos", debido a que importan la mayoría de las mercancías, sobre todo de China, donde tienen asentadas inversiones, y desplazan fácilmente a la competencia, salvo a Soriana.

El modelo de comercio inducido por WalMart, la corporación transnacional controladora de grandes tiendas minoristas y restaurantes, abona a la concentración y extranjerización económica, desconecta los precarios circuitos productivos y comerciales de la región, produce la bancarrota de pequeños comercios, promueve la importación desmedida de mercancías baratas, modifica y controla los patrones de consumo, genera empleos precarios y destruye los existentes, no sólo de la competencia, sino también fuentes y unidades económicas del sector de subsistencia. Algo similar ocurre con las tiendas Oxxo y Extra, propiedad de las grandes compañías cerveceras, que desplazan con suma facilidad a las tienditas de la esquina, pese a que venden caro.

En el mundo de las percepciones, el comprador compulsivo puede, repentinamente, experimentar la sensación de que habita una ciudad intercalada al primer mundo, pues tiene acceso a comercios, cafeterías y restaurantes emblemáticos de la economía mundial, como WalMart, Starbucks, Office Depot, McDonald's y demás. En tanto que el promotor del desarrollo puede informar, con satisfacción, que la inversión extranjera se ha incrementado y los empleos también, además de que ciertos espacios urbanos nos asemejan a Aguascalientes, considerada por muchos como la imagen misma del progreso.

Mercantilización y exportación de la gente

El proceso de mercantilización de la gente, que el propio sistema económico determina, se refiere a la necesidad de las personas para acceder a un empleo asalariado que les reporte un ingreso adecuado para cubrir la subsistencia.

Cuando existe incapacidad para dotar de trabajo formal, seguro y bien remunerado, una parte importante de la población se ve en la imperiosa necesidad de buscar el sustento familiar allende las fronteras. La mercantilización de recursos naturales se complementa, entonces, con el proceso de exportación de trabajadores y sus familias.

Para las localidades depauperadas y sus poblaciones, pero principalmente para los gobiernos neoliberales, la migración representa una especie de bendición, porque problemas como el desempleo estructural y los posibles conflictos sociales se amortiguan.

Más aún, bajo una visión también de corte extractivista, pero en este caso desde la lente gubernamental, la exportación de gente representa un manantial de recursos (las remesas), que contribuye a cumplir algunos objetivos políticos del modelo de gestión local neoliberal: las remesas salariales abocadas a la subsistencia familiar coadyuvan a respaldar la "guerra contra la pobreza", y las remesas participativas se suman al fondo social de coinversión destinado a la realización de obra pública municipal y diversos proyectos comunitarios bajo el esquema de "liberalismo social".

Paradójicamente, el comercio minorista extranjero capta una gran cantidad de remesas enviadas por los migrantes para sufragar el consumo familiar. De este modo, retorna una porción importante de remesas salariales, pero ahora transfiguradas como ganancias corporativas remitidas a las casas matrices ubicadas en el país de donde proceden las remesas.

Fetichismo y derechización del poder

El tema gravitacional de la política es el acceso y ejercicio del poder. Desde el Estado y sus distintas instancias –como el gobierno, el parlamento o el tribunal– se ejerce el poder, en tanto que los partidos resguardan sus principales vías de acceso. En virtud de la función monopólica de los partidos, los ciudadanos no tienen acceso directo a puestos de elección, formulación de leyes, diseño de políticas públicas o fiscalización de los poderes públicos. No obstante, cada vez más los partidos representan instituciones corrompidas donde perviven los intereses de las élites sociales que concentran la riqueza, el programa neoliberal centrado en la maximización de ganancias del capital privado y las prácticas antidemocráticas que posibilitan la consecución del poder a toda costa. Por esa razón predomina un pragmatismo duro que liquida principios, programas y compromisos sociales.

El fetichismo del poder representa la degradación fulminante de la actividad política orientada por el principio aristotélico de "mandar obedeciendo",

donde el ejercicio del poder atiende las necesidades del pueblo o comunidad para anteponer los intereses oligárquicos. Los políticos se conciben como depositarios unívocos de la voluntad popular, la autoridad y la institucionalidad; y a la ciudadanía se le considera como una masa atónita, ignorante y manipulable. Los políticos ejercen en su nombre el poder para procurar la culminación de sus propios intereses y los de las élites económicas y sociales. Por dicha razón, no es extraño que los políticos rindan culto a su personalidad, dispongan de un aparato promotor de imagen –antes que de un equipo capacitado y sensible– y se miren arrobados en el espejo de las encuestas de popularidad. También carecen del sano sentido de autocrítica y no toleren la crítica externa. Desde la privilegiada soledad palaciega, los problemas sociales son vistos como herencias del pasado remoto o inmediato, que no confieren responsabilidades en el presente, y como prueba se enuncia que las políticas en curso no tienen mácula de ineficacia o impertinencia, incluso se pretende que la gestión pública reinventa la sociedad cada sexenio o trienio, según corresponda. Los políticos encumbrados se creen merecedores de privilegios, por lo que asumen sin empachos una cauda de recursos, consideran como un paso natural su incursión en la órbita de los negocios y asumen el poder de decisión como una prerrogativa personal alejada de la demanda social.

El sistema de partidos deviene en un amasijo de relaciones corrompidas e interesadas. Por ejemplo, las izquierdas electorales, pretendidamente modernas y presentables, transan de preferencia con la derecha gobernante, incluso aplican con entusiasmo sus programas de gobierno a fin de preservar sus prebendas y poderíos. Los partidos se consolidan como agencias de colocación o bolsas de trabajo que benefician a los allegados de las fracciones partidarias. El arribo al poder significa ya no la pretensión de conferirle poder al pueblo, sino el compromiso de garantizar el acceso a empleos e ingresos fabulosos, relaciones exclusivas, información privilegiada y en muchas ocasiones complicidad e impunidad.

Independientemente de su color o signo ideológico, cada nuevo gobierno genera su camada de politicastros, incluso se gestan algunos círculos empresariales beneficiarios de las políticas públicas. Por tanto, el objetivo principal de los partidos y políticos es arribar al poder para ensancharlo y perpetuarlo, y no compartirlo con las facciones opositoras, a menos de que se conviertan en aliados.

Las clases populares tienen cabida como base social legitimadora, merced a la instrumentación de programas asistenciales bajo una operación política de bajo costo, que puede ser una despensa, un bulto de cemento o una co-

bija. En teoría, el poder radica originalmente en el pueblo o comunidad, pero es trasferido mediante el voto hacia los partidos y sus políticos profesionales, quienes ejercen la función de la representación política para construir el bien común. No obstante, la realidad es muy diferente.

Bajo una cartografía que ha perdido la brújula, pues otrora permitía identificar algunas señales de identidad de las fracciones de izquierda y derecha, los candidatos se promueven como mercancías sin ideas, los ciudadanos como un público consumidor y las elecciones como un fin en sí mismo. Al respecto, el sistema de poder concede a la ciudadanía indiferenciada la prerrogativa de votar por los candidatos que con la debida antelación fueron seleccionados por las élites políticas y económicas, nunca por la masa social. Los dispositivos publicitarios difunden la especie de que el voto es un instrumento ciudadano que permite generar cambios y castigar a políticos corruptos, a eso le llaman el "poder del voto". En realidad sólo se busca seducir a la inerme masa de votantes, que la mayoría no conoce los códigos y pactos subyacentes en la práctica de los políticos, además de que son mal informados por los medios de comunicación, los cuales tienen una estrecha cercanía con el poder, de modo que difunden información previamente censurada y galvanizada. En suma, el sistema de poder confiere a los partidos el monopolio de la política y excluye al grueso de la ciudadanía.

Ante la severa crisis política de representación y legitimidad, en la que los políticos se representan a sí y a sus camarillas, entre la ciudadanía cunden expresiones variopintas de desencanto, descreimiento, descontento y resistencia, pero también de apatía e indiferencia. Más aún, en lugar de prohijarse una inconformidad o rebeldía creativas, se ensanchan el cinismo y el conservadurismo azuzados por el sistema político, con el respaldo de ciertas manifestaciones de la cultura popular, como el pensamiento mágico, la religiosidad y la subalternidad. Pero quizás influye más la anestesia inoculada de forma sistemática por los medios masivos de comunicación, que ocupan las horas de descanso y esparcimiento de amplios sectores de la población, con la difusión de expresiones frívolas de culebrones telenoveleros, encuentros deportivos anodinos y noticiarios adocenados.

Ese modelo político produce un ciudadano mínimo al que no sólo se excluye de manera deliberada de la política, pues también se excluye o precariza en términos económicos en su calidad de productor y consumidor. La ciudadanía rechaza la política porque la identifica como una actividad degradante y pervertida, por lo que renuncia a conocerla a fondo y a participar en aras de su transformación. El letargo ciudadano termina siendo funcional al poder porque la mayoría de la población no asume sus problemas ni actúa

en consecuencia, sino que delega en los políticos la supuesta defensa de sus intereses y la promoción del bien común. Las definiciones políticas se gestan al seno de las cúpulas, sin consulta a la militancia y a la sociedad.

Para el sistema de poder vigente, el voto no es un instrumento ciudadano concebido para cambiar el régimen político ni el modelo económico, simplemente es un dispositivo que convalida a la clase política. Por lo que la tarea primordial de los partidos políticos es seducir, a como dé lugar, a la masa de votantes potenciales. Poco tiempo se dedica al estudio de los graves problemas nacionales, regionales y locales y a sus soluciones de fondo, que incluyen, por supuesto, la apertura de canales de participación directa de la sociedad.

Mientras tanto, los sectores sociales organizados suelen movilizarse de manera esporádica o coyuntural –mediante marchas, plantones u otras formas de presión– para exigir que las autoridades resuelvan sus problemas inmediatos, de corto plazo. Pese a algunos intentos encomiables, un problema mayúsculo es la inexistencia, todavía, de un sujeto colectivo, con visión de largo plazo, que encarne un proyecto alternativo de nación.

En el ámbito federal, la alternancia electoral, que fue calificada con premura como "transición política", llegó tardíamente, porque la verdadera transición aconteció dentro del Estado, bajo la tutela del PRI, con el cambio del modelo económico nacional y la consecuente imposición del neoliberalismo. Con el arribo al poder de políticos neoconservadores, como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, se diseñó e implementó la contrarrevolución económica, social y política. El posterior ascenso del PAN, y su continuidad discutible, no representan mayor problema para el poder; al contrario, contribuye a profundizar el neoliberalismo bajo los auspicios de la inefable coalición motejada como PRIAN. Bajo este modelo económico se impone una política pragmática y utilitarista que sigue los lineamientos de las políticas de ajuste estructural, machaconamente referidas como "las reformas que el país necesita", léase privatización, flexibilización laboral y demás. Amplios sectores de centro izquierda y de izquierda han sucumbido a esta línea programática que tiene como consigna negociar obsequiosamente todo, a cambio de preservar beneficios y posiciones.

En los ámbitos locales, el proceso de alternancia electoral ha permitido que los partidos políticos grandes se dividan el territorio nacional, en una modalidad que trastoca las fuerzas políticas en una especie de franquicias electorales, bajo el control de los gobernadores, que supeditan a los otros poderes locales. Estos gobiernos aplican o reproducen localmente las directrices del modelo neoliberal, por convicción propia o aduciendo que no tienen

margen de maniobra. Los gobiernos emanados de los grandes partidos (PRI, PAN y PRD) ejercen sus funciones bajo pautas muy similares, sin marcar grandes diferencias entre ellos, porque están más interesados en la preservación y control territorial de su poder –como si fuesen "plazas", según el lenguaje mafioso– que en construir políticas públicas alternativas. Por ello, el control político territorializado reviste ropajes de corte presidencialista, neocorporativo o, de plano, caciquil. En este renglón, un punto crítico fundamental para la izquierda electoral es que no ha logrado construir un proyecto de gobierno local alternativo, sin contar el hecho de que se está desarticulando.

Los gobiernos locales –estatales y municipales–, no han tenido la capacidad política para implementar alternativas de desarrollo, simplemente se han plegado a los designios programáticos de la federación: administrar la pobreza, maquilizar la economía, malbaratar el territorio y exportar gente. Por añadidura, la mayoría de los gobernantes usa el poder como un trampolín político. En presencia de la alternancia electoral, se advierte una línea de continuidad, que sólo es matizada por diferencias estilísticas en la aplicación de programas de obra pública, de conformidad a las asignaciones presupuestales federales, o al arraigamiento de inversión privada, salpimentada con los destellos personales de los gobernantes y sus alocuciones autorreferenciales. En todo caso, se constata que desde el ámbito del poder local no se han generado alternativas de desarrollo para beneficio colectivo. El sentido del voto popular aún no ha impactado como para que, desde arriba, se geste el anhelado cambio.

La designación de candidaturas por los partidos políticos con registro oficial obedece, primordialmente, a la cercanía de los postulantes con las cúpulas o burocracias partidarias y a los gobernantes en turno, nacionales y locales, y se respaldan con dineros públicos y privados, incluso sin las cortapisas de los topes financieros de campaña. Los mecanismos de la democracia formal, reducida a lo electoral, cierran el acceso a una genuina representatividad popular y a la construcción del poder del pueblo. En esas condiciones, se cierra la puerta para que líderes sociales genuinos, ciudadanos competentes y calificados y representantes populares legítimos contiendan por puestos de representación política. De este modo, es improbable que, por ejemplo, un líder sindical democrático, un representante vecinal o comunitario, un científico productivo, un defensor de derechos humanos o bien, personajes relevantes emanados de diversos sectores de la sociedad, pero ajenos a las determinaciones partidarias, figuren en las boletas electorales. En consecuencia, la socorrida idea de que los gobiernos y congresos, en sus distintos niveles, están conformados por los mejores hombres y mujeres no deja de ser, al final de cuentas, más que un candoroso autoelogio.

Para agenciarse la votación mayoritaria, los partidos con vínculos gubernamentales y empresariales movilizan enormes recursos monetarios que se traducen en una cauda de bienes electorales, es decir, artículos que los candidatos obsequian a la población como paliativos de la pobreza: despensas, bultos de cemento y apoyos económicos. En otra categoría se agregan piezas que difunden las insignias de la campaña y que pronto terminan como basura: volantes, calcomanías, camisetas, gorras, pendones, mantas, pintas, etcétera. También se financian comilonas, bailes populares, encuentros deportivos, corridas de toros, entre otras actividades de convivencia para fundamentar el arrastre popular del candidato. Además se organizan grupos de animación, promotores del voto y asociaciones fantasmagóricas que incentivan, movilizan y acarrean a la población. Los medios de comunicación, los grandes beneficiarios de las partidas presupuestales electorales, se frotan las manos, porque hacen su agosto en las contiendas mediante la venta de espacios publicitarios, que también incluyen aparentes entrevistas desinteresadas, y que terminan aturdiendo a la ciudadanía. Los gobiernos realizan obras de último momento e inauguraciones vertiginosas, además de que movilizan los últimos apoyos orientados a sectores populares catalogados en la zona gris de votantes indecisos. Los candidatos presumen sonrisas y poses retocadas que pretenden transmitir la imagen de una persona amistosa y confiable, como si se tratase de una mercancía en venta con su marca comercial y un eslogan publicitario machacón. La propaganda oficial llama a votar a la ciudadanía con *spots* deslavados que arengan despropósitos como los siguientes: "basta de criticar" o "¿por quién vas a votar? ¿Qué te importa, güey?, mejor vamos a ver el partido". En este periodo, florece una pujante industria electoral. El dinero privado, público y gubernamental (que también es público) aparece, entonces, como fundamento de la contienda política y acicate del voto popular. Los dineros ejercen sin demoras su esperado efecto multiplicador.

Los comicios celebrados el pasado 4 de julio de 2010 arrojan un resultado incontrovertible: la consolidación electoral del polo nacional de derecha. El triunfo abrumador de las derechas, representadas por el bipartidismo hegemónico PRI-PAN, contó con el respaldo del alicaído PRD y del resto de partidos que complementan la frágil constelación de la partidocracia. La controversia desencadenada por resultados estrechos en algunas entidades instala puntos de tensión entre la masa electoral y analistas deseosos de avivar la competitividad entre los partidos que barajan, sin embargo, candidatos intercambiables y apegados a un mismo fervor pragmático neoconservador. La derecha bicéfala, dinosáurica y confesional es la principal fuerza política territorial del país, prácticamente sin oponente formal, por el momento.

El proyecto transexenal que la tecnocracia implantara desde principios de los ochenta se afianza con el respaldo mayoritario de la población votante, que va tomando la costumbre de convalidar a esa clase política que, una y otra vez, le asesta puñaladas traperas. La eficacia del sistema político mexicano no puede ser mayor cuando la población excluida legitima a aquellos que persisten en implementar políticas excluyentes, depredadoras. Ya en dos ocasiones, el recurso del fraude electoral, orquestado en contra de candidaturas de izquierda moderada, se implementó como un mecanismo "patriótico" y clasista ("un peligro para México") en aras de salvaguardar el interés supremo de la élite social, con el complemento de los mecanismos de persuasión mediática y asistencialista, que aunado a la propagación inmovilista del miedo, constituyen el mejor dispositivo preventivo para poner a buen resguardo a la sacrosanta democracia electoral que aún no ofrece garantías de sufragio efectivo.

La política del miedo, azuzada por los embates de la "guerra contra el narcotráfico", una especie de guerra civil que produce muertes, inseguridad y miedo; la estrategia antisindical que destruye puestos de trabajo, reprime huelgas y amaga con legislaciones de despido libre; las concesiones fabulosas de bienes de la nación a las grandes corporaciones que respaldan los desvaríos gubernamentales; la campaña de motivación nacional envuelta en lábaro patrio y actuaciones de deportistas fracasados; la dictadura sanitaria que promulga la pandemias controlada por las grandes farmacéuticas; la estupidización desenfrenada de la población que promueven los consorcios televisivos; la entronización de la religiosidad popular como argamasa de la derecha sin ideología; la privatización subrepticia de sectores estratégicos bajo el ardid de la ineficiencia; el desprecio racista hacia los pobres y desposeídos; la compraventa inmisericorde del voto popular y la mercadotecnia política como fieles sustitutos del debate de ideas; la publicitación de alianzas espurias de signo izquierda-derecha, son algunos de los rasgos de la férrea determinación de la derecha cogobernante, del contrasentido democrático-autoritario, que comparte amigablemente proyectos legislativos, gubernamentales y electorales con la partidocracia que festina, en conjunto, la monopolización de la representación y el acceso a privilegios, dineros y relaciones interesadas.

El gran derrotado en estas lides es la izquierda electoral pragmática. Ante la carencia de liderazgo, proyecto y visión de futuro, los jerarcas de la izquierda pactan alianzas de corte pragmático-oportunista con el partido gobernante, bajo el flojo argumento de que combaten a caciques regionales, sin reparar en que negocian con el principal antagonista que orquesta el gobierno

basado en principios antitéticos: neoliberalismo, neoconservadurismo, clericalismo y racismo.

El PRD ha perdido su carta de navegación y es capitaneado por mercaderes políticos que con tal de ser reconocidos como la "izquierda moderna" levantan la mano de aquellos que, apenas ayer, eran motejados como "espurios" o ilegítimos, pero que hoy son la viva imagen de la cruzada democrática que no distingue ideas, valores e intereses, pero si victorias pírricas. Pactar con el principal contrincante político que, el menos en la teoría se supone que defiende los intereses contrarios, sólo tiene sentido cuando la cúpula de la izquierda renuncia a su identidad y transmuta en su contrario: la derecha de la izquierda, la izquierda neoliberal o algún formulismo por el estilo. La izquierda pragmática aparece reducida a su mínima expresión, pero juega a la perfección un papel que le fue asignado desde afuera: apuntalar a la derecha gobernante, servir de comparsa.

El PRD ha dejado de ser el referente nacional de izquierda. En la medida en que sus dirigentes están obsesionados en desmantelar a ese partido, crece la figura de Andrés Manuel López Obrador como líder de un movimiento social, aparentemente sin partido, y como candidato fuerte de la izquierda social. Pero al mismo tiempo se corre el riesgo de acrecentar la dependencia de una personalidad carismática ante la ausencia de proyecto, programa y partido. No obstante, hay que matizar esa idea, porque si algo distingue al movimiento lopezobradorista es su empeño en configurar un proyecto alternativo de nación, articular una base social organizada y participativa y construir un frente electoral sin las consignas burocráticas y oportunistas de las cúpulas de la llamada izquierda.

Ante la embestida de la crisis civilizatoria y de la propia crisis del sistema político, emerge, más que nunca, la necesidad de recuperar colectivamente el sentido de la política como una actividad que le confiere poder al pueblo para construir el bien común social, y no sólo como un instrumento de validación de la clase política mediante el voto. Por lo mismo, los movimientos sociales, los ciudadanos organizados, los sectores pobres y marginados y los promotores de alternativas no se pueden fiar del voto como único instrumento legal y no violento para la transformación social. Para los sectores sociales que buscan una alternativa nacional, el problema va mucho más allá de la siempre postergada refundación del PRD o de la pretendida unidad de las izquierdas electorales. La construcción de un proyecto alternativo no es una tarea que los partidos de la supuesta izquierda consideren primordial, pues es sabido que prefieren negociar entusiastamente con los jefes del poder económico y político para ganar posiciones, recursos, privilegios y reflectores. Las cúpu-

las partidarias ensimismadas se distancian conscientemente de su militancia y de los sectores sociales que dicen representar, pues entienden bien que los juegos del poder se tejen tras bambalinas.

Los sectores sociales críticos, que impugnan no sólo al bipartidismo de derecha, sino primordialmente al proyecto de modernización neoliberal, concentrador y excluyente, están llamados a unir fuerzas, a construir un agente sociopolítico que enarbole un proyecto de nación. Por el momento, la respuesta no radica en el sistema de partidos o en su desdibujado flanco izquierdo, pues alberga a una clase política pragmática, oportunista y camaleónica. En otros sectores, como los movimientos sociales y algunos segmentos de la academia y la intelectualidad, se reformulan algunas ideas que, si bien todavía no cristalizan en un proyecto amplio, viable y necesario, constituyen de manera embrionaria los cimientos para la transformación social pacífica e incluyente. Más aún, existen referentes al sur del continente, donde están indudablemente más aventajados, que resultan interesantes y, hasta cierto punto, ilustrativos, para emprender una reconstrucción del actual estado de cosas que lacera, destruye.

El desfiladero de la insustentabilidad social

Los signos vitales de nuestra sociedad contemporánea dan cuenta de la existencia de condiciones de insustentabilidad social. La vida humana está amenazada o acotada, en distintos grados y demarcaciones, por problemas de gran calado como violencia, crisis, pobreza, desempleo, hambruna, enfermedades y migración. El actual, constituye un contexto donde la mayoría de la gente vive al día y en malas condiciones.

Zacatecas se ha consolidado como una región subsumida en el subdesarrollo o mal desarrollo que depara para la mayoría de su población condiciones muy inestables, excluyentes e inseguras. En parte, debido a que la entidad se ha decantado como un territorio propicio para el saqueo de recursos naturales, trasferencia de excedente y expulsión de gente, y no como un territorio que eslabone procesos de acumulación, distribución del ingreso y justicia social. Entre los principales rasgos de insustentabilidad social, podemos destacar los siguientes:

1) *Desmantelamiento del sistema de subsistencia*. Fundado en la autonomía, autoconsumo, cultura regional, capacidades locales y sentido de comunidad, el sistema de subsistencia es atacado con el fin de abrir nuevos espacios de valorización de capital. Un caso relevante de esta forma

de acumulación por despojo es el control corporativo de la producción de alimentos básicos. Como resultado, amplios contingentes poblacionales se ven liberados o despojados y al buscar nuevos medios de vida están dispuestos a engrosar las filas del trabajo precario, con lo cual ejercen una presión que es manipulada por el Estado para debilitar al sector laboral. En compensación, los gobiernos implementan programas asistencialistas y clientelares destinados a los sectores de la pobreza extrema. El sector de subsistencia, que históricamente era uno de los pilares de la sociedad zacatecana, afronta una de sus peores crisis y coloca a su población en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero no sólo este sector, sino que también las capas medias observan un deterioro en el acceso a los satisfactores para cubrir las necesidades básicas en alimentación, salud, vestido y vivienda.

2) *Desempleo estructural*. Por ser una zona marginal a las grandes inversiones privadas y públicas, la entidad presenta, como uno de sus rasgos primordiales, una sobreoferta de población que no encuentra empleo formal de calidad. En el mercado laboral prevalece el empleo precario, subempleo, trabajo informal y desempleo. No obstante, el desempleo crónico es disimulado por la migración compulsiva. En contraste, el perfil patronal es diverso: a) existe una suerte de empresariado abstracto, que no vive, ni siquiera conoce el territorio, pues se trata de la personificación de grandes corporativos transnacionales que invierten en la entidad para aprovechar sus recursos naturales y la mano de obra barata; b) un empresariado local, de perfil conservador y rentista, que otorga bajos salarios, no es innovador ni dispone de la capacidad para promover el dinamismo de la economía; c) el sector público que emplea a buena parte de la población en el ámbito gubernamental y educativo; y d) en el extremo, el auto empleado, considerado patrón de sí mismo, pero que incluye una multiplicidad de figuras económicas diferenciadas. La exclusión económica que padece el grueso de la población en tanto productor, empleado o consumidor produce un desequilibrio congénito entre las estructuras demográficas, productivas y laborales.
3) *Desmantelamiento productivo*. La intromisión de inversión extranjera en la minería, el comercio, los servicios y la maquiladora contribuyen a la desarticulación del aparato productivo local, pues no se encadena ni "hacia atrás" ni "hacia adelante", amén de que destruye la referida economía de subsistencia. Mientras algunos sectores incurren en un extractivismo acendrado (minería), otros sustituyen los productos nacionales y locales por la importación (comercio) y otros más se abocan

a sobrexplotar el trabajo barato (maquiladora). La bancarrota de la economía local propicia el abandono de actividades productivas.

4) *Aumento de la pobreza*. El régimen de trabajo asalariado, barato e inseguro, como arma competitiva de la economía regional, según los preceptos del mercado, además de las condiciones de desempleo y el deterioro de los bienes y servicios públicos, producen el incremento del costo de la vida. La política gubernamental de corte asistencial no revierte el problema estructural de la pobreza, sólo constituye un paliativo, pues dista mucho de configurar un salario social básico, que conceda una prestación económica periódica para quienes no pueden cubrir con suficiencia sus necesidades básicas, y dista también de restituir el sistema de subsistencia, o erigir, al menos, una economía solidaria de corte popular.
5) *Fractura metabólica sociedad-naturaleza*. La precariedad productiva se refleja por la vulnerabilidad de sectores, como el agropecuario, ante las eventualidades climatológicas, como sequías, heladas, inundaciones y erosiones, sin contar los embates de las "fuerzas del mercado". Estos fenómenos también afectan los asentamientos humanos mal planificados y construidos con materiales de mala calidad que someten a la población a condiciones de elevada vulnerabilidad y riesgo. También se registran problemas de contaminación por actividades productivas desreguladas y agotamiento de recursos hídricos, saqueo de minerales y contaminación por corporaciones depredadoras. Además de la contaminación de arroyos, ríos y presas por las descargas de aguas negras derivadas de la falta de planeación urbana y del insuficiente tratamiento o reciclaje del agua. El resultado es el desajuste entre el ecosistema, las estructuras productivas y las necesidades sociales.
6) *Inseguridad multidimensional*. La incapacidad para generar suficientes fuentes de empleo formal de calidad propicia un clima de inseguridad laboral, amén de que la abundancia, baratura y desorganización del sector laboral se oferta como un factor de atracción de la inversión privada foránea. Esto constituye un elemento perverso del gobierno facilitador, que abona a la insustentabilidad permanente. La falta de acceso a trabajo asalariado o su precarización merman las condiciones de seguridad social y propician que servicios públicos, como salud y educación, se mercantilicen paulatinamente. El desmantelamiento productivo está asociado a la inseguridad alimentaria, a problemas de hambruna, desnutrición y enfermedades de segmentos amplios de la población. En tanto que el ascenso de la violencia del crimen organi-

zado, atizado por la estrategia oficial de "guerra contra el narcotráfico", sitúa a poblaciones enteras en un estado de zozobra permanente que hace insufrible la vida cotidiana.

7) *Resquebrajamiento del sistema educativo*. El sistema educativo local es sumamente precario y amerita una restructuración profunda. Entre los elementos más conspicuos se encuentran la infraestructura insuficiente, bajas remuneraciones y deficiente formación del profesorado, manoseo electoral del sindicato y la desarticulación de los distintos niveles educativos. La imagen más dramática deviene de la exclusión que padecen los jóvenes del sistema educativo, pero también del desempleo que depara para el grueso de los egresados de los niveles profesionales y de posgrados. Otro problema revelador es el cierre de escuelas a causa del despoblamiento y desnutrición que padecen, sobre todo, los infantes. Paradójicamente, la falta de un apoyo sustancial a la educación pública convive con la emergencia de centros privados que convierten a la educación, antes que nada, en un negocio redondo. En tanto que en el nivel básico, las empresas de alimentos chatarra han intervenido a las escuelas y manipulan fácilmente la dieta diaria de los escolares: hoy por hoy, la escuela está formando, con toda seguridad, consumidores adictos a la chatarra, pero no necesariamente prospectos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, una nueva cultura política y una ética para la vida. En última instancia, el analfabetismo funcional que caracteriza a una porción importante de los egresados de los distintos niveles educativos es un síntoma de fracaso del proceso formativo de enseñanza-aprendizaje.
8) *Relaciones de género desequilibradas y discriminación de minorías*. En los ámbitos familiar y social, prevalecen relaciones inequitativas que oprimen, sobre todo, a la mujer, pero también a los infantes, jóvenes y viejos. En su seno, existen relaciones violentas que no son suficientemente sancionadas por las instituciones. En el ámbito público no se han diseñados leyes, reglamentos y políticas públicas que promuevan realmente relaciones equitativas en todos los niveles. Por ejemplo, no se promueven los derechos reproductivos de la mujer, como el derecho al aborto, que llegado el caso es también un problema de salud pública. Además de que no se han promovido derechos para sectores considerados minoritarios, como homosexuales, jóvenes con determinadas preferencias culturales e indigentes.
9) *Minimización de la ciudadanía*. Pese a la alternancia electoral, que permitió el ascenso al poder de un segmento de la izquierda electoral, la

ciudadanía no dispone aún de canales de participación en la esfera de lo público y más específicamente en la esfera gubernamental. Salvo en los comicios electorales, donde es llamado machaconamente a ejercer el voto, el ciudadano no es partícipe en el diseño de planes de desarrollo, políticas públicas, proyectos legislativos o designación de candidaturas partidarias. Como no existe un sistema de rendición de cuentas consistente, tampoco participa en la evaluación del desempeño de la autoridad local. Mientras que los canales de expresión ciudadana son resueltamente limitados, prevalece una cultura política mediática que descansa en la exaltación y culto a la imagen de los gobernantes.

10) *Expulsión de gente*. La "válvula de escape" del sistema de insustentabilidad social prevaleciente es, evidentemente, la migración hacia otras entidades del país y a Estados Unidos. Plantear que esto obedece a una cultura, a una tradición, o que de plano es un fenómeno económicamente natural que no se puede detener, es pretender encubrir el fracaso sociopolítico del modelo económico, de la gestión de los tres niveles de gobierno y el resquebrajamiento del entramado social. La conexión entre insustentabilidad social y migración compulsiva es profunda y requiere ser atendida con seriedad.

Bajo el actual modelo socioeconómico que priva en el país y la entidad, soportado por la gestión del gobierno afecto a la inversión privada, el sistema político que ha fetichizado el poder y la debilidad organizacional de la sociedad, aunado a las propuestas electorales efectistas de los contendientes al gobierno local, no se vislumbra, todavía, un proyecto alternativo que fije como meta primordial la necesidad de dotar de condiciones mínimas de sustentabilidad social. Las propuestas pragmáticas y cortoplacistas que enarbolan los candidatos abonan a la perpetuación de las condiciones de insustentabilidad social. No obstante, los procesos electorales, a pesar de sus múltiples vicios y deformaciones, abren una oportunidad para repensar las condiciones de vida prevalecientes en nuestro entorno inmediato y la necesidad de plantear alternativas sociales.

Hacia una política del bien común social

Frente a la problemática de la neoliberalización, la insustentabilidad social, el fetichismo del poder y la derechización del sistema político, conviene dotar de nuevo contenido a la actividad política y la organización económica en

aras de una transformación social sustantiva. Desde una visión ética del bien común, la idea de sustentabilidad social se refiere a la capacidad potencial de una organización socioeconómica, nacional o local, para garantizar, en el presente y futuro, el desarrollo humano generalizado. En tal caso, se afirma la necesidad de afianzar el derecho a la vida, no como un postulado puramente normativo o prescriptivo, sino como un requisito fundamental para garantizar la pervivencia de la naturaleza humana en un mundo donde no haya relaciones de opresión, dominación o explotación, o al menos, donde la vida no sea considerada como un simple recurso desechable. Una alternativa sistémica al paradigma del capitalismo neoliberal dominante se localiza en el derecho al buen vivir, que requiere el cumplimiento de una serie de condiciones cruciales, con el concurso de gobierno y sociedad:

1) *Bases materiales para la vida*. El acceso al empleo digno, seguro y bien remunerado y a los correspondientes satisfactores básicos para la subsistencia diaria constituyen una condición necesaria, más no suficiente, para elevar la calidad de vida. También es importante el acceso a elementos adicionales que permitan el despliegue de las potencialidades humanas creativas, críticas y artísticas. Se trata de construir una economía para la vida que posibilite el acceso al empleo digno, subsistencia decorosa y el desarrollo de capacidades humanas como objetivos deliberados del Estado y no un resultado improbable de la economía de mercado.
2) *Reciprocidad en la relación entre sociedad y naturaleza*. La simbiosis progresiva sociedad-naturaleza no sólo significa preservar el ecosistema y la biodiversidad contenida en bosques, ríos, arroyos, lagos y demás microrregiones; sino que también supone reconfigurar las ciudades y localidades urbanas y rurales, que más que construcciones artificiales corresponden a la naturaleza humana contemporánea, con todas sus ventajas y problemáticas. El respeto al entorno inmediato se complementa con la gestión sustentable de los recursos regionales como cimiento de las bases naturales de la producción económica y la reproducción de la vida.
3) *Cohesión de base comunitaria*. La restitución de la vida cotidiana en las comunidades requiere el acceso seguro y ordinario a bienes básicos como el agua potable y demás servicios públicos; y, en el entramado social, la reconstrucción de relaciones de convivencialidad y cooperación que permitan el despliegue de la cultura regional, la organización y participación de base con miras a construir el bien común social.

4) *Democracia sustantiva*. La resignificación de lo político entraña el ejercicio pleno de los derechos políticos, así como la participación en la toma de decisiones relevantes, el diseño de políticas públicas y la evaluación del desempeño de gobernantes y representantes políticos. Como trasfondo, es importante fortalecer el Estado de derecho y el Estado laico. Es decir, la democracia sustantiva va mucho más allá de lo puramente electoral y conjuga la democracia representativa y la democracia participativa.
5) *Cultura para la transformación social*. El restablecimiento del sistema educativo público y la promoción de las actividades artísticas, científicas y tecnológicas, además de la democratización de los medios de comunicación y la difusión de información clave para la ciudadanía constituyen requisitos inobjetables de una cultura sustentable.
6) *Subjetividad crítica y sentido de cambio.* La promoción del debate de ideas, el diálogo y concertación políticos, bajo la premisa de una cultura política centrada en principios como el bien común, solidaridad, bienestar y respeto por la naturaleza, representan principios orientadores para una sociedad comprometida con el interés general. La utopía colectiva vinculada a un proyecto de transformación social es el fundamento para la acción sociopolítica de largo aliento.
7) *Institucionalidad democrática*. Un gobierno que "mande obedeciendo" se construye desde lo local hacia lo nacional, no mediante políticas asistencialistas, clientelares o paternalistas, sino mediante un gobierno que incentive la política participativa territorializada, comprenda la problemática social, estimule el compromiso social del capital y el Estado y oriente su gestión con criterios de decisión que pongan en el centro el bien común social. El desarrollo alternativo puede ser orientado por una institucionalidad que conjugue las posiciones emanadas "desde arriba" y "desde abajo" mediante políticas de nuevo tipo, de corte posneoliberal.